

Y la próxima crisis, ¿cuándo es?

Por Aldo Abram, es director Ciima-Eseade

En un seminario que tuve el gusto de compartir con Javier González Fraga, contó que cada vez que subía a un ascensor con alguien y lo reconocía le preguntaba cuándo sería la próxima crisis. Es cierto que ése siempre es el gran temor que nos transmiten a los economistas nuestros conciudadanos cuando ven un prolongado tiempo de bonanza. En vez de "siempre que llovió, paró", nos hemos acostumbrado a que acá al "buen tiempo le sigue la tempestad", así que debemos tener el paraguas a mano.

Hoy no parece que estemos encarando hacia un estallido como los que hemos acostumbrado tener cada cinco o 10 años, a menos que éste venga de afuera. Por ello, hay que aclarar que, si bien es baja la probabilidad de tormentas externas, el mundo parece seguir complicándose y sería aconsejable para el Gobierno actuar con prudencia. Por ejemplo, sería una audacia soñar con volver a pagar tasas de interés de un año atrás por el financiamiento al sector público. Entonces, en los próximos meses se debería tratar de cubrir la mayor parte posible de las necesidades del Estado para 2008. Por nuestra triste experiencia, sabemos el costo de un "default" y no tiene sentido "timbear" el futuro del país por unas cuantas décimas menos de tasa.

Los dos pilares fundamentales para evitar una crisis de origen interno son mantener la solvencia fiscal y controlar la inflación, ambas prioridades del Gobierno, aunque podamos discutir las formas. Por ejemplo, durante 2007, el gasto primario aumentó casi un 50% y el ahorro que se hacía para pagar capital de la deuda pública tendió a desaparecer. Sin embargo, el gobierno continuó priorizando la solvencia fiscal de corto plazo, al hacer aprobar la reforma previsional que le sumó más de \$ 8000 millones de fondos que estaban acumulados en la AFJP. Lamentablemente, a costa de la solvencia de largo plazo, ya que algún futuro gobierno deberá encontrar la forma de pagar las jubilaciones comprometidas con los nuevos aportantes al sistema del Estado. Una historia conocida y que tuvo triste final en la Argentina.

A principios de año, cuando se lanzó esta reforma, muchos pedimos tiempo para discutirla; ya que permitía apropiarse de una gran masa de recursos para aumentar el gasto frente a las elecciones. Lamentablemente, a diferencia de Chile, donde se tomaron más de dos años para discutir su diseño con todo el espectro político y los especialistas, acá la aprobaron en tres semanas (durante las vacaciones de verano). Así, casi sin debate público, se puso en juego el nivel de vida de millones de futuros jubilados. Para el año que viene, la expectativa oficial es tener unos \$ 34.000 millones de ahorro primario y muchos decían que sólo se lograrían siendo austeros y licuando el gasto público. No necesariamente será así. El fuerte aumento esperable de la recaudación de 2008 ya era suficiente para recomponer gran parte de la solvencia fiscal y aumentar las erogaciones. Ahora, estamos viendo que a este aumento de la presión tributaria se lo potencia con las subas de las retenciones y otros cambios impositivos. Por lo tanto, no solamente la carga fiscal sobre el sector privado del país volverá a batir récord, sino también el gasto primario respecto del producto bruto interno (PBI). No aumentará al 50% como este año, pero sí alrededor de la mitad de este porcentaje. Es decir, una vez que se define el nivel de ahorro fiscal que se quiere, se ve cómo se exprime la "naranja" para financiar el mayor aumento de erogaciones posible.

En este marco, no es factible esperar una verdadera reforma tributaria o una del sistema de Coparticipación Federal de Impuestos. Es la vieja historia argentina. Cuando vienen las recesiones, los gobiernos aumentan los impuestos para sostener el gasto público. Cuando vuelven las épocas de "vacas gordas" nadie se acuerda de los sufridos contribuyentes y se dedican a gastarse todo el aumento de la recaudación.

El otro pilar es la política monetaria y cambiaria, que apuntó a mantener un "dólar alto" con una inflación controlada; aunque a niveles demasiado elevados. Es cierto que la reducción de las compras de divisas por parte del Estado, debido al menor ahorro público, le quitó ayuda al Banco Central para evitar la aceleración en la suba de precios. Sin embargo, aunque tuvo que encarar sólo la tarea de comprar las divisas excedentes, contó siempre con los instrumentos necesarios para evitar hacerlo con pesos que la gente no demandaba y depreciar nuestra moneda. Es más, durante todo el período de altas turbulencias internacionales, donde no compró reservas, mantuvo el ritmo de emisión para sostener el crédito y darle "combustible" a la economía.

Ahora, superadas las elecciones, es probable que tenga el incentivo de buscar desacelerar la inflación y, para ello, el ritmo de creación de moneda nacional. Además, una presidenta que asume en un contexto de aceleración de suba de precios debería tener incentivos políticos para apoyar a la autoridad monetaria para que la reduzca, aunque seguramente en forma gradual. Esto la posicionaría favorablemente con el electorado con vistas a 2009; por lo que podría esperarse que se encaminaran en ese sentido.

Normalizar el Indec

Sin embargo, queda un problema por resolver: la normalización del Indec. Parece una tarea políticamente difícil de realizar. Aunque se pudiera esperar una gradual desaceleración de la inflación real hasta 2009, ¿qué posibilidades habría de que fuera menor que el cerca del 8% que el índice oficial mostrará para este año? Por lo tanto, ¿cómo normalizar las estadísticas de precios sin reconocer la irrealidad de los datos actuales ni mostrar una poco política "aceleración" de la inflación?

Los problemas económicos que genera no tener estadísticas creíbles son muchos. Entre ellos, una mayor incertidumbre al evaluar si se realiza una inversión o no; por lo que la cantidad de proyectos que se vuelven viables disminuye. De esta forma, también merma nuestra expectativa de crecimiento y bienestar futuro. Sin embargo, hay un tema mucho más grave al que nadie le presta atención. En una verdadera democracia republicana, nuestro deber como ciudadanos responsables es controlar a aquellos a los que les delegamos el ejercicio del poder. Para ello es que son necesarios organismos que brinden información pública creíble. ¿Cómo vamos a ejercer este deber si el Gobierno interviene en la confección de los datos con los que deberíamos controlarlo?

Por lo tanto, si hay crisis, seguramente será de origen externo. Pareciese que los dos pilares fundamentales, que son el control de la inflación y la solvencia fiscal, están firmes. Las materias pendientes están en la reconstrucción de la deteriorada calidad institucional y seguridad jurídica argentina. Si no nos abocamos a esta tarea, aún podremos vivir sin estallidos económicos, pero deberemos acostumbrarnos a hacerlo con el nivel de vida y de pobreza de los países subdesarrollados.